

FRAGMENTOS

Cómo mueren las democracias (I)

“A mediodía del 11 de septiembre de 1973, tras meses de una tensión creciente en las calles de Santiago de Chile, aviones a reacción Hawker Hunter de fabricación británica se abatieron sobre La Moneda, el palacio presidencial neoclásico situado en el centro de la ciudad, y lo bombardearon. Bajo una lluvia de bombas, La Moneda fue pasto de las llamas. El presidente Salvador Allende, elegido tres años antes como líder de una coalición de izquierdas, se había hecho fuerte en el interior de aquel palacio. Durante su mandato, Chile se había visto sacudido por el malestar social, la crisis económica y la parálisis política. Allende había declarado que no abandonaría su puesto hasta concluir su trabajo, pero había llegado el momento de la verdad. Encabezadas por el general Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas de Chile se estaban haciendo con el control del país. A primera hora de aquel funesto día, Allende pronunció un discurso desafiante a través de una emisora radiofónica nacional con la esperanza de que sus muchos partidarios tomaran las calles en defensa de la democracia. Pero la resistencia no se materializó. La policía militar que protegía el palacio lo había abandonado y, por toda respuesta, su discurso radiofónico encontró el silencio. Al cabo de pocas horas, el presidente Allende había muerto, y, con él, la democracia chilena”.

“... Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una elite gobernante corrupta...”.

“Así es como solemos creer que mueren las democracias: a manos de hombres armados. Durante la

Guerra Fría, golpes de Estado provocaron el colapso de tres de cada cuatro democracias caídas. Las democracias de Argentina, Brasil, República Dominicana, Ghana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Perú, Tailandia, Turquía y Uruguay perecieron de este modo. Y en el pasado más reciente, golpes de Estado militares derrocaron al presidente egipcio Mohamed Morsi en 2013 y a la primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra en 2014. En todos estos casos, la democracia se disolvió de un modo espectacular, mediante la coacción y el poder militar”.

“Sin embargo, existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como hizo Hitler en la estela del incendio del Reichstag en 1933 en Alemania. Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente...”.

“En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una elite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más ‘auténtica’ que aprovechara la inmensa riqueza petrolífera del país para mejorar la vida de los pobres. Empatizando hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie, muchos de los cuales se sentían ignorados o maltratados por los partidos políticos establecidos, Chávez fue elegido presidente en 1998. En palabras de una lugareña del estado natal de Chávez, Barinas, la noche electoral: ‘La democracia está infectada y Chávez es el único antibiótico que tenemos’.

“Cuando Chávez puso en marcha la revolución que había prometido, lo hizo democráticamente. En 1999 celebró unas elecciones libres a una nueva Asamblea Constituyente en las que sus aliados se impusieron por una mayoría aplastante. Ello permitió a los chavistas redactar por sí solos una nueva Constitución. Pero era una Constitución democrática y, para reforzar su legitimidad, se celebraron unos nuevos comicios presidenciales y legislativos en 2000. Y Chávez y sus aliados volvieron a imponerse. El populismo de Chávez suscitó una intensa oposición y, en abril de 2002, fue depuesto brevemente por el Ejército. Pero el golpe militar fracasó y permitió que un Chávez triunfante reclamara para sí una mayor legitimidad democrática”.

STEVEN LEVITSKY Y DANIEL ZIBLAT.

Cómo mueren las democracias. Editorial: Ariel, 2018, págs. 10-12

La ley ya no es la ley

La Ley 640 del 2010 y el artículo 590 del Código General del Proceso establecieron como requisito de procedibilidad de las demandas declarativas el agotamiento de una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, salvo que el demandante desconozca el domicilio del demandado o si en la demanda se solicita el decreto de medidas cautelares.

Obviamente, el sentido de esta regulación no es otro que el de que antes de que se inicie un proceso, las partes tengan la oportunidad de intentar conciliar sus diferencias, de manera que no se trata de una “formalidad innecesaria” (CGP, art. 11).

Si ese requisito de procedibilidad no ha servido para disminuir la litigiosidad y debe derogarse, es asunto que compete al legislador, no a los jueces, pues estos últimos están en la obligación de cumplir la ley. De no ser así estaremos pisando el terreno de la dictadura judicial, tan dañina como cualquiera otra forma de totalitarismo.

Digo lo anterior, porque he conocido la providencia del 10 de julio del 2018 del Grupo de Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades (Rad. 2017-800-00352), avalada por el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil del 15 de noviembre del 2018 (Exp. T-1101-22-03-000-2018-02698-00) que, en la práctica, han arribado a una conclusión derogatoria de la exigencia del requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho.

En el proceso de marras quien demandó lo hizo como representante de una sociedad y si bien había convocado a una audiencia de conciliación como



RAMIRO BEJARANO GUZMÁN

Profesor de Derecho Procesal de las universidades de los Andes y Externado de Colombia

“Si ese requisito de procedibilidad no ha servido para disminuir la litigiosidad y debe derogarse, es asunto que compete al legislador, no a los jueces...”.

accionista de la misma, lo cierto es que en nombre de la entidad demandante no había agotado tal exigencia. La superintendencia admitió la demanda y notificado el demandado propuso excepción previa de inepta demanda por no haberse cumplido con este requisito extrajudicial y previo, ante lo cual el actor dijo subsanar el defecto, pidiendo el decreto de una medida cautelar. La superintendencia declaró no probada la excepción previa, porque si bien echó de menos la no realización de la audiencia de conciliación extrajudicial, en todo caso consideró que habiéndose solicitado ante el juez del conocimiento el decreto de una medida cautelar se había subsanado el defecto formal.

Palabras más palabras menos, la superintendencia, por sí y ante sí, decidió que la facultad de pedir una medida cautelar

para enervar el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho se puede ejercer antes o aun después de presentada la demanda, sin importar en el último evento que el demandado ya haya contestado la demanda.

Tal decisión es abiertamente contraria a la ley, porque la teleología de obviar la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho cuando se solicita una medida cautelar radica en la necesidad de que esta última no vaya a fracasar por virtud de que el demandado se entere de la misma. Está fuera de toda duda que, si se solicita una medida cautelar para remediar la ineptitud de la demanda por no haberse realizado la conciliación previa, el demandado conocerá anticipadamente el sentido y la finalidad de la cautela que se pretende en su contra, y ello puede conducir al fracaso de la misma.

Que la Superintendencia de Sociedades haya tenido por subsanada la ausencia del requisito de la audiencia de conciliación extrajudicial con la solicitud tardía de una medida cautelar estando en curso el proceso confirma la inseguridad de la administración de justicia en manos de entes administrativos, como así lo he venido cuestionando⁽¹⁾; empero, que los jueces ordinarios consideren en sede de tutela que independientemente de que la Sala comparta o no la decisión “no parece antojadiza, pues se justificó en una interpretación razonable de la norma procesal”, sí es un hallazgo preocupante. No fue eso lo que quiso la ley, ni es tampoco un precedente judicial. Por ese camino de considerar que aun siendo equivocada una providencia tiene razonabilidad, jamás prosperaría una tutela.

1. Bejarano Guzmán, Ramiro y Rodríguez Mejía, Marcela. *Estudio de la delegación de funciones jurisdiccionales en la Rama Ejecutiva: una revisión global y particular*. Ed. Externado de Colombia, 2018, págs. 19 a 50.

LA ESPORA

Conflicto armado



BACTERIA